

Poder Judicial de la Nación

Expte n°: 41929/2022 AML

Autos: “SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. N° 41929/2022

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N° 2022-441-E-AFIP-DVJUDA#SDGTLSS, la AFIP-DGI no hace lugar a la impugnación presentada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA, y confirma las multas por moraa intimadas por los períodos 8/2021, todo ello conforme lo expuesto en el dictamen que antecede.

II.- Asimismo, se le notificó a la contribuyente de lo resuelto, informándole que la resolución dictada agotaba la instancia administrativa, y en el supuesto de disconformidad debería interponer recurso de apelación, cuya admisión está sujeta al depósito del importe de la deuda.

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora optó por recurrir a esta instancia judicial, sin dar cumplimiento con el requisito del pago previo establecido por el art. 15 de la ley 18.820.

III.- El remedio procesal intentado fue interpuesto sin dar cumplimiento a la carga de orden formal de efectuar el depósito previo del importe de la deuda, actualización e intereses de conformidad con lo dispuesto en el art.15 de la ley 18.820; art.12 de la ley 21.864 modificada por la ley 23.659 y art.39 bis inc.b) del D.L. N°1285/58 con las modificaciones introducidas por la ley 24.463, cuya omisión trae aparejada la deserción del recurso.

Así delimitada la incidencia, corresponde destacar que el art. 15 de la ley 18.820 expresamente dispone que “...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso”.

Con relación a si son inconstitucionales las disposiciones de diferentes leyes que supeditan la concesión del recurso contra resoluciones que imponen multas, a que previamente se pague su importe, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación tiene declarado que no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que aquélla reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente y ha desestimado como insuficientes las manifestaciones en abstracto acerca de la imposibilidad del pago.

Fecha de firma: 15/11/2022

Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ADRIANA CLAUDIA CAMMARATA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MYRIAM G GARCIA CASTILLO, SECRETARIA DE CAMARA



#36994893#349393067#20221114124024375

Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues se ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864 (ver fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplen situaciones patrimoniales concretas de los afectados a fin de evitar que aquél pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto de evitar que las excepciones desvirtuaran la aplicación del principio general, que lo que ha de valorarse para eximir el pago inmediato en el supuesto de multa, no son las dificultades de su oblación, derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de los negocios de la demandada, sino a través de ella, se verifique un importante desapoderamiento de bienes de la entidad.

Los elementos obrantes en la causa -consistentes en los balances y certificación contable -, dan cuenta de la inexistencia de disponibilidades para afrontar el pago de la suma requerida como previa, motivo por el cual, acreditada la imposibilidad de hacer frente al pago previo a la apelación, que como requisito de admisibilidad exige la normativa vigente, ya que su cumplimiento importaría un estado de desapoderamiento tal que hace viable su encuadre en la primera de las hipótesis de excepción de creación pretoriana de la Corte Suprema de justicia de la Nación, corresponde la apertura del recurso.

IV.- En ese contexto, la recurrente apela, y se agravia del rechazo de la nulidad planteada respecto de los vicios de las actas y del procedimiento llevado a cabo por el Fisco. Asimismo cuestiona lo decidido en torno a la multa dispuesta, al considerar que se desprende de manera indubitable la inexistencia de un requisito indispensable para la aplicación de cualquier sanción penal, como es la culpabilidad del presunto infractor, no configurándose tampoco las restantes condiciones de punibilidad que exige el tipo infraccional en cuestión, no habiendo ninguna circunstancia o indicio que permite atribuirle responsabilidad por la infracción endilgada. Insiste en que, dada la naturaleza penal de las sanciones aplicadas, devienen aplicables los principios penales constagrados en la Constitución Nacional, entre ellos el principio de culpabilidad, en virtud del cual sólo puede ser reprimido quien sea culpable. Finalmente se queja de la “cuantía” de las multimillonarias penas de multas cuya aplicación se pretenden, en razón de la alegada desproporción con la hipotética lesión que habría causado al bien jurídico protegido por la norma infraccional, lo que constituiría un exceso de punición reñido con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las penas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

V.- Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excm. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

VI.- Entrando a resolver en la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, cabe señalar que en las diversas resoluciones que aquí se recurren, se han ratificado las multas por mora en el ingreso de aportes y contribuciones de seguridad social intimadas al recurrente, en virtud de lo establecido en el art. 8 de la Resolución General N° 1566 (texto sustituido en 2010) al constatare la falta de cancelación de los saldos de las declaraciones juradas.

Esta Sala, ha sostenido sobre el particular que en el caso de multas previsionales la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor



invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. “Pilot Pen S.A. c/DGI s/ Impug. de deuda”, CFSS. Sala II, sentencia del 19/10/98).

A mayor abundamiento cabe señalar que la RG 3756, reemplazada por la RG 1566 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que como se señaló precedentemente, se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma.

La Resolución General 1566/04, en su art. 5 especifica el régimen sancionatorio a aplicarse en virtud de lo dispuesto en el art. 15 punto 1 inc. c) de la ley N° 17.250. Dicha norma establece que una vez constatada la infracción por parte del organismo, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa con relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado sin atribuir relevancia a toda circunstancia de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente.

El art. 15 inc. b) de la ley 17.250 además de prever el caso de falta de denuncia de trabajadores también determina multa para el caso que exista incumplimiento de la retención de aportes que deban efectuarse respecto de los trabajadores, motivo por el cual tampoco le asiste razón al apelante toda vez que se encuentra verificada la configuración de una infracción formal lo que justifica la imposición de la multa correspondiente a la infracción detectada en razón de la inobservancia por parte de la contribuyente de las prescripciones del artículo citado.

Por todo lo expuesto, no logrando conmovir el recurso interpuesto las fundamentaciones de las resoluciones recurridas, corresponde confirmarlas.

VII.- Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Confirmar las la resolución recurrida, de acuerdo a las fundamentaciones expuestas en la presente; 3) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y remítase.

